

El Salvador proceso

informativo semanal

año 9
número 367

enero 11
1989

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- Guerra y escuadrones de la muerte
- Descenso del PDC
- Inicio de otro año de guerra
- Fuertes movilizaciones populares de principio de año
- La cumbre, otra vez pospuesta
- Informe sobre el asesinato de Jürg Weis

Guerra y escuadrones de la muerte

Nadie en un país en guerra como el nuestro debería desconocer un mínimo de las leyes de la guerra; en principio, para no pedirle a ésta lo que ésta no puede dar. Lamentablemente, todavía hay unos cuantos, de los más radicales opositores al diálogo y con mucha resonancia en los editoriales matutinos "de mayor circulación", que creen que la guerra todo lo puede y, en consecuencia, reclaman la necesidad de una guerra total. Ahora los deseos de estas plumas "patriotas y nacionalistas" se ven colmados y atendidos con el resurgimiento, al menos propagandístico, de tres escuadrones de la muerte dispuestos a realizar el necesario trabajo sucio de exterminio que la supuesta incapacidad de la cúpula castrense no permite realizar, como suelen espetarle los frentes de fachada de la oligarquía. Desgraciadamente, al esclarecimiento de estos insipientes de la guerra poco contribuye el ejército, cuando evade la explicación profunda de por qué no se gana la guerra.

Es justamente en lo tocante a la raíz del problema en donde el ejército es menos explícito, y debería y podría ser lo más; precisamente allí en donde menos comprendido es por los radicales de derecha. Vagamente afirma que el nuestro es un conflicto complejo, que no puede ser ganado únicamente en el campo militar, sino conjuntamente en el terreno económico y social. Más francos y honestos con el pueblo salvadoreño aparecen los cuatro coroneles norteamericanos en el informe que sobre la guerra en El Salvador publicaron en marzo del año pasado, diagnosticando que persisten las causas de injusticia social y económica que la originaron, y por tanto las causas de la insurgencia; reconociendo de paso, y por el mismo hecho, la alta moral y motivación del ejército rebelde.

En nada contribuye tampoco a la ilustración de los belicistas el que periódicamente el ejército anuncie la implementación de nuevas tácticas en contra del FMLN, como lo ha hecho también en esta oportunidad el jefe del Estado Mayor; intentando con ello dar a la guerra nuevos aires que ya no es capaz de respirar. Si se va a dar credibilidad a las impresionantes cifras globales del conflicto durante 1988, proporcionadas por el mismo funcionario (unas 100 operaciones militares de consideración y un total de 224 mil patrullajes y combates menores, reportando 2,187 bajas al FMLN) no se ve por donde se le puede pedir más al

accionar y a los resultados alcanzados por el ejército. Y el resultado más inmediato en 1988 es un crecimiento y fortalecimiento del FMLN, en su estructura y accionar, observado en una mayor extensión e intensidad de sus ataques.

Porque tampoco es dar buenas razones de lo poco que en la guerra se avanza calificar indistintamente de terrorista a todo el accionar del FMLN, para de allí agenciarse el químico logro de que ello evidenciara la desesperación y virtual derrota en que se encuentra la guerrilla. Puede que algunas acciones o componente de acciones de los insurgentes rayen en el terrorismo, pero ello no oculta que el operar de aquellos es sustancialmente militar; de lo contrario no tendría explicación el promedio de 3 mil bajas que el ejército suele reconocer anualmente, 7 mil al decir del FMLN.

Más descabelladas son las aseveraciones de los elementos militares y militaristas de ARENA, que atribuyen a falta de voluntad política del Ejecutivo el estancamiento de la guerra. Ni con el actual Ejecutivo, ni con el próximo, con alguna posibilidad en manos de ARENA, el ejército permitirá que lo fundamental de su estrategia sea manoseado por políticos de derecha democristiana o de ultraderecha arenera. Puede que los militaristas de ARENA, una vez distantes de la moderación mostrada por su líder civil Cristiani, moderación cada vez más ambigua, intenten persuadir a la cúpula del ejército de la conveniencia de colaborar o al menos permitir la operación masiva de escuadrones de la muerte, como su brazo armado y terrorista, aunque sin vínculos públicos (por los problemas de "imagen" que tendrían virtualmente "atado de manos" al ejército). Pero esto es problema del ejército, sin cuyo aval muy poco podrían hacer estos escuadrones.

Porque si quisiera procederse realmente en contra de este terrorismo, datos, pistas y testimonios los hay de sobra. Podría comenzarse utilizando la valiosa información que sobre la estructura, el operar, los cabecillas y patrocinadores de los escuadrones de la muerte recogieron y publicaron a finales de 1983 los diestros periodistas del *Albuquerque Journal*; con mucho la información más completa que se haya recopilado sobre las estructuras del terror en El Salvador. Ciertamente la lista de personajes citados coincide buenamente con la de los fundadores del partido ARENA, nuevamente entronizados en la Asamblea Legislativa, como en 1983, y ya descabezando y nombrando fiscales a su antojo. Quizá no pueda castigárseles por lo pasado, pero si desea saberse quién es responsable de las actuales muertes y atentados dinamiteros que ahora multiplican los escuadrones de la muerte, hay con quien averiguarlo.

Descenso del PDC

CARNET: El presidente del Consejo Central de Elecciones (CCE), Ing. Ricardo Perdomo, informó el 04.01 que el total de ciudadanos empadronados asciende a 2,100,000, cifra que supera en casi medio millón el número de empadronados cuando se efectuaron las elecciones de marzo de 1988. Sin embargo, deploró que unos 400 mil salvadoreños no puedan ejercer el sufragio el 19 de marzo próximo debido a la disposición aprobada por la Asamblea de suspender la entrega del carnet electoral el 2 de febrero, lo cual no daría tiempo al CCE de extender dicho documento a todos los ciudadanos que ya están empadronados pero que aún no lo han recogido. Por su parte, el consejal de ARENA, Ing. Jorge Alberto Díaz, declaró el 06.01 que el plazo del 2 de febrero sería suficiente para que la gran mayoría de esos 400 mil ciudadanos puedan recoger su carnet, aunque algunos se quedarían sin él "por el mismo descuido natural de los salvadoreños de dejar para último momento el cumplimiento de nuestras obligaciones".

CANCELACION: El presidente del CCE informó el 04.01 que dicho organismo ha iniciado los trámites legales para la cancelación del Partido de Orientación Popular (POP), por no haber alcanzado en las últimas elecciones el porcentaje mínimo del 0.5 por ciento de votos que la legislación electoral exige a los partidos para continuar funcionando como tales.

Apenas restan dos meses para las elecciones presidenciales y la campaña electoral todavía no parece cobrar "altura", pese a las expectativas iniciales que pudiera haber suscitado la elección de figuras aparentemente serias y preparadas como candidatos por parte de las principales fuerzas contendientes, a diferencia de lo ocurrido en elecciones pasadas.

La mayoría de encuestas —exceptuadas las corridas por el PDC— siguen mostrando una cómoda delantera del Lic. Cristiani sobre sus adversarios. En concreto, la última encuesta corrida por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA durante la primera quincena de diciembre, en once departamentos del país, mostraba un sensible incremento de la ventaja de Cristiani sobre su más inmediato perseguidor, el Dr. Fidel Chávez Mena, en relación a la encuesta anterior del IUDOP, corrida a principios de noviembre.

Mientras que en noviembre Cristiani obtendría un 26.2 por ciento de la intención de voto frente a un 21.3 por ciento conseguido por Chávez Mena, en la encuesta de diciembre el porcentaje de éste habría bajado a 12.5, frente a un leve incremento de Cristiani, a 26.9 por ciento. Por su parte, el Dr. Ungo, candidato de la Convergencia Democrática, que en noviembre obtuvo un 5.9 por ciento de la intención de voto, en diciembre bajó a 2.3 por ciento. A su vez, el candidato del MAC, Julio Adolfo Rey Prendes, pasó de 0.5 a 0.9 por ciento, mientras que el del PCN, Morán Castaneda, lo hizo de 0.4 a 0.5 por ciento. Las dos variantes más importantes de la encuesta de diciembre con relación a la de noviembre serían, entonces, el sensible descenso proporcional de las simpatías electorales de Ungo y, sobre todo, de Chávez Mena.

Es aventurado intentar explicar a qué se debería la variación sufrida por la popularidad aparente de Chávez Mena entre una y otra encuesta del IUDOP. Con todo, caben algunas hipótesis explicativas.

Ante todo, debe tomarse en cuenta que la primera encuesta de las mencionadas (noviembre) fue corrida por el IUDOP cuando aún no se había abierto formalmente la campaña electoral. La segunda encuesta (diciembre), en cambio, habría recogido los efectos publicitarios del primer aluvión de la campaña. Cabe decir que, hasta la fecha, pero sobre todo en sus comienzos, la propaganda democristiana ha sido de sensible inferior calidad que la de ARENA, tanto desde el punto de vista de sus

contenidos como en su enfoque y factura técnica. Si electivamente, como ARENA lo ha denunciado, la propaganda democristiana está siendo diseñada y conducida por Fritis y demás asesores sudamericanos del antiguo IVEPO, ARENA debiera estarles más bien agradecida, en lugar de solicitar su expulsión del país.

Entre otros errores crasos, la propaganda democristiana ha reincidido en la tónica confrontativa que, si bien es cierto le resultó efectiva al Ing. Duarte para vencer a D'Aubuisson en las elecciones de 1984, redundó en un rotundo fracaso en marzo de 1988 y, previsiblemente, podría llevar a una nueva debacle electoral al PDC el 19 de marzo próximo, si este partido insiste en la repetición mecánica de esquemas propagandísticos que pudieron ser efectivos en el pasado pero que no responden a las nuevas circunstancias del proceso político. ARENA, en cambio, está actuando con mayor sagacidad política y, aunque en las últimas semanas empieza a ceder a las provocaciones democristianas, en general ha mantenido una campaña menos confrontativa. Por lo demás, cuando ha recurrido a la crítica destructiva y a la acusación, ha solido hacerlo con una ironía bastante más fina que la del PDC, como lo ilustran las "Arenillas".

Asimismo, la propaganda democristiana ha adolecido de un marcado mesianismo en torno a la figura de Chávez Mena, como si la solución de los ingentes problemas estructurales que agobian al país dependiera del esfuerzo de una magna figura prometeica ("por nosotros sólo Fidel). En contraste, la propaganda de ARENA—desde el punto de vista formalmente publicitario—se afina en un llamado a la participación de todos para que el pueblo entero sea sujeto de su propio destino. En este marco, Cristiani y Merino no aparecen como redivivos Prometeos que tomasen sobre sus espaldas la tarea de resolver la crisis, sino a lo más como conductores de un magno esfuerzo colectivo que enfrenta sus propios problemas.

Otro factor que, a título de hipótesis, podría contribuir a explicar el descenso de popularidad del PDC entre inicios de noviembre y los comienzos de diciembre, sería el de la postulación del Dr. Francisco Barrientos como candidato a la Vicepresidencia. La nominación de Barrientos aconteció a finales de noviembre, es decir, en medio de las dos encuestas del IUDOP. Aparentemente, esta elección de un "independiente" como compañero de fórmula de Chávez Mena habría suscitado

INSPECCION: a raíz de un atentado dinamitero contra el Departamento de Biología de la Universidad de El Salvador (UES) y a la imposición de un cordón militar alrededor de la misma, el Rector de la UES, Lic. Luis Argueta Antillón, se reunió el 23.12.88 con el Viceministro de Seguridad Pública, Cnel. Leopoldo Antonio Hernández, para proponerle a la Fuerza Armada una inspección en el campus universitario y terminar así con la campaña de desprestigio que acusa a la UES de esconder armas en sus instalaciones. El Cnel. Hernández indicó al Rector que trasladaría la idea al Alto Mando "para que sean ellos quienes tomen la decisión". El 05.01, la UES convocó a personalidades religiosas, militares, políticas, empresariales, laborales y diplomáticas para que inspeccionaran el campus universitario. A la invitación, el Jefe del Estado Mayor, Cnel. René Emilio Ponce, respondió que "la Fuerza Armada no se va a prestar a ningún show que quiere montar la UES; el ingreso a la UES lo vamos a hacer en el momento oportuno y con la ley en la mano". El 06.01, catorce personalidades de las invitadas practicaron la inspección, sin encontrar indicios de los arsenales que, según las acusaciones castrenses, se escondían en la Universidad.

RECURSOS: El ex-fiscal General de la república, Dr. Roberto Girón Flores, presentó el 03.01 un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la destitución de dicho cargo ejecutada por la fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa. Girón Flores indicó que "la Asamblea me separó en forma ilegal e injusta" ya que "no tiene la facultad de destituirme y ha violado los derechos que me da la Constitución Política. En razón de ello vengo a demandarla con esta recurso de amparo constitucional".

SABOTAJE; Según informes proporcionados por el coronel Carlos Eduardo Meléndez, asesor de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año recién pasado el FMLN habría operativizado 259 acciones de sabotaje contra el sistema de sub-transmisión de energía eléctrica a nivel nacional, 500 contra las líneas de transmisión primaria y 5 ataques de envergadura contra importantes instalaciones de CEL, ocasionando pérdidas por unos 9.1 millones de dólares. Esta cifra incluiría pérdidas directas de más de 1.8 millones de dólares por consumo de combustible para la puesta en operación de centrales generadoras del fluido eléctrico durante los apagones causados por el sabotaje guerrillero.

cierto malestar en diversos cuadros dirigentes y de base del PDC y, eventualmente, también en sectores simpatizantes que no atinarían a comprender por qué el partido postula como candidato a la Vicepresidencia a una figura cuya trayectoria ha estado tan ligada a la empresa privada e incluso a la derecha política. Si así fuera, la nominación de Barrientos, que por un lado estaría orientada a captar el voto de amplios sectores "independientes" todavía indecisos, pero cuyo respaldo podría decidir la suerte de los comicios, por otro lado podría mermar relativamente la clientela tradicional del PDC.

Además de los factores apuntados, intrínsecos a la estrategia de campaña del PDC, habría otros factores exógenos que también conspiran contra las posibilidades democristianas el 19 de marzo. Entre éstos estaría el artículo 2 del Decreto 132 aprobado por ARENA y el MAC, relativo a las reformas introducidas recientemente al Código Electoral. El artículo en cuestión estipula que el Consejo Central de Elecciones (CCE) dejará de extender el carnet electoral 45 días antes del día señalado para las elecciones. Según declaraciones ofrecidas el 4 de enero por el presidente del CCE, Ing. Ricardo Perdomo, ello implica que el plazo para la extensión del carnet vence el 2 de febrero próximo. Según Perdomo, habría unos 400 mil salvadoreños que ya están empadronados pero a quienes el CCE no podría entregar su carnet debido simplemente a la imposibilidad material de extender tal número de carnets en tan poco tiempo. El PDC ha asegurado en repetidas ocasiones que la mayoría de estos salvadoreños, cuya extracción social sería más popular que la del promedio del electorado que votó el 20 de marzo de 1989, estaría más inclinada a votar por el PDC que por ARENA, motivo por el cual este partido estaría interesado en obstaculizar la expedición del carnet electoral a más ciudadanos.

Así pues, las tendencias prevalecientes en el desarrollo de la campaña siguen augurando la llegada de Cristiani a la silla presidencial en junio próximo, como no fuera que el PDC sea capaz de revelar en las biografías de Cristiani o de Merino alguna oscura faceta que, bien

Inicio de otro año de guerra

Tras las maniobras militares rebeldes, operativizadas el 6.12 y en las cuales se atacaron las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería y del Batallón Arce, en San Miguel, del Destacamento Militar N.º. 4 en San Francisco Gotera, y posiciones del mismo destacamento en las poblaciones de Delicias de Concepción, Osicala, Lololiquillo y el cerro Cacahuatique, todos en el departamento de Morazán; el accionar de las unidades guerrilleras experimentó un relativo descenso en lo que respecta a las operaciones estrictamente militares. Así, durante las dos primeras semanas de diciembre, el quehacer guerrillero se enmarcó en el desarrollo de una serie de acciones centradas en el sabotaje contra la economía nacional.

La Fuerza Armada (FA) por su lado, como es costumbre, atribuyó el descenso de la actividad guerrillera a un elevado desgaste de las fuerzas del FMLN y a la alta operatividad de las unidades castrenses en las zonas de influencia y expansión guerrillera. Sin embargo, las acciones desarrolladas por el FMLN durante la segunda quincena del mes parecen indicar que la disminución del ritmo del quehacer guerrillero se debió, más bien, a un repliegue táctico de las fuerzas rebeldes.

En este contexto, el 19.12 el FMLN, atendiendo el llamado hecho por sectores religiosos, hizo pública una propuesta de tregua para las festividades de Navidad y Año Nuevo, que inmediatamente fue rechazada por el gobierno y la FA. Las acciones guerrilleras posteriores a esta oferta de tregua, enmarcadas en la línea de dar continuidad a la campaña de acciones ofensivas inaugurada el mes de septiembre, mostraron un claro incremento en el nivel de las operaciones e hicieron sensible la presencia de las fuerzas rebeldes en la capital. En este sentido, las acciones más importantes habrían sido los ataques contra las instalaciones de la Fuerza Aérea (FAS) ejecutado el 20.12, en el oriente de la capital; y contra las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la FA y del Ministerio de Defensa, el 23.12.

De acuerdo a radio Venceremos, en el ataque contra las instalaciones de la FAS los comandos urbanos ocasionaron un total de 33 bajas. Mientras tanto, en la acción contra el Estado Mayor fueron parcialmente destruidas instalaciones administrativas del Ministerio de Defensa, resultaron 3 civiles muertos, numerosos heri-

BALANCE: Durante su homilía del 1 de enero, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Damas, informó que, según datos recogidos por la oficina de Tutela Legal, la violencia política habría dejado en 1988 un saldo de 1,369 víctimas mortales, entre civiles, militares y guerrilleros. Rivera detalló que las acciones militares dejaron un saldo de 1111 muertos, a los cuales se suman 60 asesinados "al estilo de los escuadrones de la muerte", 41 muertes imputadas a la guerrilla y 85 al ejército, cuerpos de seguridad y defensa civil. Entre los hechos de violencia de la segunda quincena de diciembre, Monseñor condenó el atentado explosivo de que fue objeto la Iglesia Luterana "La Resurrección", ya que "amén de constituir un hecho temerario que pudo causar víctimas humanas constituye un desacato a un centro religioso y un paso más en la línea de la violencia irracional". Asimismo, condenó la práctica de los ajusticiamientos y las amenazas proferidas por el FMLN contra los alcaldes, así como la reaparición de grupos terroristas de ultraderecha. En orden a superar esta situación, subrayó que la tarea más importante para 1989 será "la búsqueda de la paz y la reconciliación que, aunque es un camino complejo los pasos deben ir encaminados en esa dirección".

CAMBIOS MILITARES: El Cnel. René Emilio Ponce, Jefe del Estado mayor, informó el 31.12.88 que solamente se darán 5 movimientos de comandantes y la designación del Gral. Adolfo Blandón como agregado militar de la Embajada de El Salvador en Washington. Informó además de 423 ascensos en la escala activa del ejército. Los cambios son: Cnel. Joaquín Arnoldo Cerna Flores, quien estaba como comandante del CIT-FA, pasa como Jefe de Operaciones del Estado Mayor; su puesto será ocupado por el Cnel. Ricardo Alfonso Casanova, quien se venía desempeñando como Jefe del Destacamento Militar N.º. 7. La vacante de Casanova será ocupada por el Cnel. Roberto Mauricio Staben, quien tenía varios años de ser Comandante del Batallón Arce, en San Miguel. A esta vacante llega el Cnel. René Arnoldo Majano, quien se desempeña como Ejecutivo de la Seguridad Brigada en Santa Ana. El Cnel. Francisco Martínez ha sido nombrado subdirector de la Policía de Hacienda, en sustitución del Cnel. Juan Armando Rodríguez, quien pasó al Destacamento Militar N.º. 5. Han sido ascendidos a generales los coroneles Rafael Antonio Villamariona y Leopoldo Antonio Hernández. Otros ascensos incluyen: 10 tenientes coroneles a coroneles; 21 mayores a teniente coronel; 19 capitanes a mayores; 77 tenientes a capitanes; 216 subtenientes a tenientes.

dos, unos 14 vehículos destruidos total mente o parcialmente y daños en edificios cercanos. Ambas operaciones fueron realizadas con la utilización de explosivos y vehículos con dispositivos en forma de plataformas de lanzamiento de cargas explosivas, que el FMLN ha denominado "unidades móviles de demolición". Por su lado, los jefes militares minimizaron la importancia de los ataques, los calificaron de acciones propagandísticas y los atribuyeron a la debilidad del FMLN. Sin embargo, tal tesis no deja de ser discutible sobre todo si se toma en cuenta lo que militar y logísticamente significa realizar acciones como ésta en el centro de la retaguardia estratégica del ejército y a plena luz del día. Así, con el ataque a la Guardia Nacional, en noviembre pasado, los comandos urbanos del FMLN habrían logrado realizar tres operaciones de importancia estratégica en el marco del quehacer militar en la ciudad y, de esta suerte, avanzar en la consolidación de una nueva etapa de la guerra urbana.

Tras estos ataques, el FMLN intensificó su campaña de sabotaje contra el tendido eléctrico y sus operaciones militares, especialmente en las zonas norte, oriental y paracentral del país. Por su lado, la FA reforzó sus operaciones de rastreo y patrullaje y montó un fuerte operativo de seguridad en la capital, tratando de impedir supuestos trasiegos de armas para acciones urbanas durante el fin de año. Así, haciendo un recuento de los reportes proporcionados por radio Venceremos, el FMLN habría causado a la FA en los últimos 15 días del año unas 509 bajas. La FA, por su lado, reportó al menos medio centenar de bajas en las filas del FMLN en el mismo período.

De esta suerte, al concluir el último mes del año, la dinámica de la guerra pareció sugerir una posible intensificación de las acciones armadas, y así lo han reconocido los jefes castrenses y los mandos rebeldes. Al concluir el año, además, con sus acciones el FMLN parece haber logrado definir a la capital como un nuevo e importante frente de guerra.

Al iniciarse 1989, la dinámica de la actividad bélica parece haber reducido en intensidad, al menos en lo que respecta al accionar estrictamente militar del operario guerrillero. Durante los primeros 10 días de enero, se han registrado combates de encuentro, emboscadas guerrilleras sin mayor significación y acciones de sabotaje en la capital. Los mandos castrenses, por su parte, han hecho explícita su sospecha de que tal reducción pudiera ser un compás de espera para futuras acciones

estratégicas, mientras los rebeldes realizan los desplazamientos, logísticos y de combatientes, necesarios para ejecutarlas.

Uno de los elementos que sí ha venido cobrando gran importancia en el marco de la estrategia insurgente, y cuyas consecuencias podrían ser mayores de las previstas de cara a los comicios presidenciales de marzo próximo, es la implementación y profundización de la política de desestabilización del poder municipal. La decisión del FMLN de no permitir el libre ejercicio del poder municipal actual fue hecha expresa desde marzo del año recién pasado y parte de la base de la existencia de un doble poder político y militar en el país. Así, a lo largo del año fueron asesinados un total de 8 alcaldes de zonas conflictivas bajo la acusación de ser parte de la red de contrainsurgencia de la FA. Sin embargo, el momento más crítico por el que ha entrado la estructura del poder local municipal, inició a mediados de diciembre, después que el FMLN lanzó una campaña encaminada a lograr la renuncia de los alcaldes y la desintegración de sus concejos municipales. De esta forma, entre el 4 de diciembre y el 10 de enero al menos 40 ediles de 8 de los 14 departamentos han presentado su renuncia formal.

Por su parte, la FA ha iniciado el año con una fuerte movilización de tropas y unidades de apoyo en el área norte de los 3 departamentos de la zona oriental, en el marco de una nueva operación de contrainsurgencia. Ello, de acuerdo a declaraciones de jefes castrenses, en vista a contrarrestar las posibles acciones estratégicas contempladas en los planes guerrilleros.

Con todo, los primeros días de enero sugieren un descenso relativo de las acciones armadas que podrían estar en función, como lo señalan los jefes castrenses, de posteriores operaciones de considerable magnitud.

PLATAFORMA: Según la plataforma del Comité de Defensa del Consumidor difundida el 07.01, en El Salvador el 76.6 por ciento de la población urbana y el 89.7 por ciento de la rural viven en situación de pobreza (el 64.6 por ciento de la población urbana y el 71.4 por ciento de la rural vive en situación de extrema pobreza). El Comité denuncia también que "existe un gran sector de subempleo conocido como informal, cuya situación se agudiza cada año por la guerra, por las fuentes de trabajo cerradas y los despidos masivos. El mismo Ministerio de Economía reconoce que hay más del 67 por ciento de desempleo, y sin sumar un total de 3,748 despedidos y un total de 1,712 desempleados por cierres definitivos". En relación a la capacidad de los salarios mínimos para cubrir el costo real de la canasta básica familiar, el Comité señala que para octubre de 1988 el costo de ésta ascendía a 1,850 colones mensuales, de modo que "en el área urbana la canasta básica sobrepasa 4 veces el valor del salario mínimo y 7 veces para los trabajadores del campo". Con respecto a la guerra, el Comité denuncia que "el presupuesto salvadoreño para la guerra se ha incrementado en más del 80 por ciento con respecto al inicio del conflicto, y sin embargo, la Fuerza Armada pide un refuerzo presupuestario para 1989" mientras se agudizan los servicios públicos de salud, educación, etc.

Fuertes movilizaciones populares de principio de año

El año se ha iniciado con una preocupante tendencia a incrementar, de modo mucho más directo y abierto que en los últimos meses de 1988, las acciones violentas en contra de dirigentes y bases de las organizaciones laborales de oposición; y las organizaciones, a su vez, parecen haber optado por dar respuesta de protesta rápidas y efectivas, quizá en un esfuerzo por contener el crecimiento de tan nefasta tendencia militar y/o gubernamental.

El primer indicio de que el año se iniciaría con una ofensiva castrense contra el movimiento popular organizado de oposición, lo ha constituido el fuerte cerco militar que desde el 22.12.88 se ha tendido en los alrededores de la Universidad de El Salvador (UES), ejecutando intensos cateos en vehículos y personas que ingresan al campus universitario. Las protestas de autoridades y estudiantes de la UES se escucharon inmediatamente, pero el cerco militar persistió. El 05.01, las autoridades de la UES invitaron a una comisión especial a que hiciese un recorrido por el campus universitario a fin de constatar que en el mismo no se guardan armas ni tipo alguno de material bélico. Entre las personalidades invitadas figuraban también altos jefes militares, que apresuradamente recharzaron la invitación aduciendo que "no vamos a prestarnos a la farsa de la UES", por cuanto según su apreciación, proveniente de "informes de la inteligencia militar, las armas ya han sido sacadas de la universidad".

El 24.12.88 en la madrugada fueron capturados, por efectivos de la Guardia Nacional, en su casa de habitación, Vilma Vásquez y su esposo, Jaime Estevez, miembro de la Junta directiva de la Asociación de Trabajadores del MAG (ANTMAG), la primera y miembro del Movimiento Pan, Tierra, Trabajo y Libertad (MPTL), el segundo. Los

cargos de que se ha acusado a los detenidos son fundamentalmente la "posesión de documentos subversivos, drogas y pertenencia a organizaciones guerrilleras". Tal acción, junto a un conflicto laboral persistente en el MAG, ha generado el inicio de un paro indefinido por parte de ANTMAG, a partir del 05.01, en el que participan unos dos mil trabajadores de ese Ministerio. Las demandas principales presentadas por ANTMAG son: la libertad inmediata de Vilma Vásquez; la reincorporación de 7 trabajadores despedidos desde tiempo atrás, a quienes el Ministro de Agricultura, Oscar Morales, se había comprometido a reincorporar; y el pago de los 7 meses adeudados de horas extras y viáticos.

Según informes de los trabajadores en paro, las consecuencias inmediatas de la acción laboral serán la pérdida de cosechas de hortalizas y la suspensión del control de calidad de carne y leche. La única respuesta hasta ahora hecha pública por funcionarios del MAG ante tal movilización de los trabajadores, ha sido que el MAG como institución no puede legalmente interceder en la captura de Vilma Vásquez por cuanto no se trata de una detención con causas o vínculos laborales directos con la institución.

En la misma línea, 25 personas (20 mujeres y 5 hombres) fueron capturados el 06.01 luego de haber disuelto una marcha pacífica de organizaciones de mujeres y organismos humanitarios (CONAMUS. AMS) frente al cuartel de la Primera Brigada de Infantería, con sede en San Salvador, para protestar por el reclutamiento forzoso que la Fuerza Armada realiza en los barrios populares. La disolución de la concentración popular (en la que predominaba la presencia de mujeres y niños) fue realizada "con gases lacrimógenos y disparos", incidentes en

medio de los cuales fueron realizadas las capturas.

Los hechos que siguieron fueron un cerco militar, asalto, cateo y capturas en el local de la Confederación de Asociaciones Cooperativas El Salvador (COACES), a raíz de que en el lugar, ubicado a unos 300 metros de la sede de la Primera Brigada se refugiaron algunos de los manifestantes. Según la denuncia de los hechos presentada por COACES el 10.01 en un comunicado de prensa, fueron "privados de libertad unas 40 personas durante aproximadamente seis horas intentando impedir la comunicación telefónica"; fue "cateado minuciosamente el local y sustraídos ilegalmente documentos de trabajo, fotografías, cassetes, grabadoras, dinero en efectivo, etc.", y "capturados violentamente mujeres y niños", pese a la insistente y enérgica protesta de los cooperativistas que se encontraban en el local. A tal cateo se hizo presente el Cnel. Orlando Zepeda, Jefe de la Brigada, "quien ante el reclamo de los cooperativistas, ofreció más violencia como respuesta al descontento popular", según el comunicado de COACES.

Declaraciones de jefes castrenses dadas el 06.01 informaron que todas las capturas serían enviados a los cuerpos de seguridad y/o consignados a los tribunales acusados de "causar desórdenes callejeros y destrucción de bienes privados". El 07.01, 16 de los capturados fueron consignados por la Policía Nacional al Juzgado 5º. de lo Penal, bajo los cargos aludidos.

Las protestas de organizaciones labora-

les, humanitarias y de mujeres ante los hechos han sido numerosas, así como las reiteradas exigencias de que los capturados sean liberados.

Cara importante de la coyuntura laboral actual la constituye también la huelga general en la industria de la construcción, convocada por el Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC) a partir del 09.01, como medida de presión para que sus demandas presentadas desde el último julio sean negociadas por CASALCO. El paro, según informes dados a la prensa por dirigentes del SUTC, involucra a 177 empresas constructoras y a unos 40 mil trabajadores del sector. Las demandas prioritarias del sindicato son un aumento salarial del 50 por ciento y mejores prestaciones socio-laborales. La UNOC, por su parte, en un comunicado difundido el 09.01, expresa su apoyo y solidaridad con la movilización del SUTC.

Así las cosas, los ejes centrales del movimiento laboral persistentes desde años atrás, a saber, por un lado, los salarios insuficientes, las escasas prestaciones, las negativas de las patronales a negociar; y por otro lado, la represión a los trabajadores organizados, tienden a remarcar a principios de 1989. El punto a señalar sería entonces que quienes tienen el poder en este momento de la crisis se permitiesen detenerse a reconsiderar, con sano criterio, sus respuestas tradicionales a las demandas de los trabajadores, en orden a aprender las caras lecciones que en la materia ha dado la historia salvadoreña, y se decidiesen por fin por el camino del diálogo.

La cumbre, otra vez pospuesta

Al concluir 1988, las perspectivas de una revitalización de las iniciativas diplomáticas para buscar soluciones políticas al conflicto centroamericano parecían resurgir, luego de casi un año de estancamiento, con buenas probabilidades de abrirse paso y consolidar avances concretos en la vía de la distensión (Proceso 364-365). El nuevo año se inauguraba dentro de este esperanzador espíritu. En efecto, el canciller salvadoreño, Ricardo Acevedo Peralta, anunciaba el 2 de enero que la celebración de una cuarta reunión cumbre de los presidentes centroamericanos, pospuesta en cuatro ocasiones en el último semestre del 88, estaba "garantizada" y que el gobierno salvadoreño, anfitrión del encuentro, trabajaba en los preparativos de su realización. El presidente guatemalteco, Vinicio Cerezo, por su parte, expresaba su "optimismo" sobre el desenvolvimiento y los previsibles resultados que se obtendrían de la cita ya que la misma "es muy importante en las actuales circunstancias que se viven en el istmo". Incluso el canciller hondureño, Carlos López Contreras, manifestaba que el presidente Azcona y la delegación del gobierno de Honduras viajarían a El Salvador "muy prudentes, pero con espíritu positivo, para hacer exitosas las sesiones de presidentes, ya que nuestros lineamientos son de paz y búsqueda de soluciones a los problemas de Centroamérica".

Todas esas declaraciones reflejaban la necesidad y la voluntad dentro de los principales actores de la crisis regional de poner de nuevo en marcha Esquipulas II. Una reciente coyuntura pacifista parecía favorecer los deseos de los gobiernos centroamericanos. Tal coyuntura es, ante todo, fruto del cambio de administración en la Casa Blanca, lo cual hace prever nuevas líneas de acción de la política norteamericana hacia Centroamérica que pondrían el énfasis más en las alternativas de nego-

ciación que en las opciones bélicas. En Washington, efectivamente, existe en la actualidad el consenso que reconoce que "la política de escalada militar ha conducido la situación en el área a un callejón sin salida aparente, con deterioros gravísimos en los niveles de vida de los países de la región, con serios problemas políticos en casi todos ellos y sin que la seguridad de EUA o ningún otro de los protagonistas haya mejorado en todos estos años.

Además, el deterioro político y militar que anuncia la desarticulación de la contrarrevolución nicaragüense ha propiciado que el gobierno hondureño gestione, con la colaboración del resto de gobiernos del área, la formación de un mecanismo imparcial de verificación del cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II; especialmente los referidos al cese de la ayuda a los grupos irregulares e insurreccionales que operan en la región y a la prohibición del uso del territorio para apoyarlos.

Aunque el gobierno hondureño había impulsado la creación de este mecanismo como una forma de presión al gobierno norteamericano para comprometerlo a resolver el problema de la presencia de una contrarrevolución desorganizada dentro de su territorio, no por ello la consecución de tal objetivo dejaba de ser muy beneficiosa para la revitalización de Esquipulas II. De hecho, el principal éxito esperado de la cumbre de presidentes centroamericanos radicaba en la toma de decisiones políticas que allanarían finalmente el camino a la implementación efectiva de este tipo de medidas de seguridad regional, aunque tampoco se daba por descartado el alcanzar acuerdos y avances en materia de democratización interna, toda vez que la necesidad de construir la paz continúa siendo la más urgente tarea en Centroamérica.

La celebración de la cumbre estaba programada para el 15 y 16 de enero, justo un

año después del encuentro de Alajuela. Además de la reunión cumbre, también se habían programado dos encuentros, uno de vicescancilleres el 10 y el 11, y el otro de cancilleres el 12 y 13, ambos a celebrarse en Managua con el propósito de elaborar la agenda concreta que los presidentes discutirían en El Salvador.

No obstante, todo el panorama de positivas expectativas en torno a la reactivación del proceso de paz en la región se esfumó inmediatamente el 6 de enero cuando se conoció la solicitud del presidente costarricense, Oscar Arias para que el encuentro presidencial se aplazara una vez más. Arias hizo llegar una nota al resto de sus colegas en la cual justifica su petición afirmando que no existía el tiempo suficiente entre el encuentro de cancilleres y la reunión cumbre para que los mandatarios pudiesen conocer y estudiar concienzudamente la agenda preparada por los cancilleres. Tal eventualidad, según Arias, provocaría el fracaso del encuentro presidencial. En la nota enviada al resto de gobernantes, el presidente costarricense afirma que "una nueva reunión de presidentes no puede tener como resultado proclamas en pro de la libertad y la democracia, que no puedan ser respaldadas por compromisos y mecanismos firmes e irrevocables que garanticen el fiel cumplimiento de esos compromisos y el respeto a esos valores". Asimismo, Arias indica que "es-timo conveniente conocer los puntos de vista, en relación con Centroamérica, de la nueva administración de EUA. Para ello es necesario disponer del horizonte suficiente que nos permita analizar los lineamientos generales que inspiran esa política".

La sorpresiva decisión del gobernante costarricense desencadenó una generalizada reacción de desconcierto, preocupación

y rechazo entre el resto de sus homólogos. Los gobiernos de Honduras y El Salvador reiteraron su disposición y buena voluntad de mantener la celebración de la cumbre en las fechas acordadas, aunque al final terminaron aceptando tácitamente la disposición costarricense. En cambio, los gobiernos de Guatemala y Nicaragua trabajaron afanosamente por recuperar la realización del encuentro, a pesar de que el gobierno de Arias dio como un hecho su suspensión. Los funcionarios de Guatemala y Nicaragua insistieron en las inconveniencias que suponía postergar el encuentro y en el grave retroceso que significaba este hecho por los esfuerzos de distensión en el área. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, hizo énfasis en el hecho de que "subordinar la celebración de la cumbre a la espera del diseño de la política de EUA hacia Centroamérica lesiona la independencia y la soberanía de esta región, lo cual es inaceptable y sería dar pasos hacia atrás". Al señalar su inconformidad con la posición del presidente costarricense, Ortega dijo además: "qué gran ironía sería ésta. Que el presidente Arias... el gran gestor del Plan Esquipulas, que le dio el Premio Nobel de la Paz, sea el mismo que entierre ahora a Esquipulas".

Los esfuerzos por rescatar la cumbre terminaron en vano. El gobierno de Guatemala no asistió a la reunión de vicescancilleres y se rompió de esa manera el calendario de actividades que culminarían con la cumbre centroamericana. Costa Rica niega que su intención sea concluir con el proceso de pacificación regional, pero lo cierto es que la confusión y el desaliento predominan en las esferas políticas del área y la continuación de las confrontaciones bélicas no podrá ahogar el clamor por la paz de 27 millones de centroamericanos.

Informe sobre el asesinato de Jürg Weis

Transcribimos el resumen del informe que una delegación europea presentó el 10 de enero recién pasado, en San Salvador, Berna y Munich, en relación a sus investigaciones sobre el asesinato del teólogo suizo, Jürg Weis, perpetrado en las inmediaciones de Ilobasco (Cabañas) el 22 de agosto de 1988. El informe fue elaborado a solicitud del Secretariado para Centroamérica, con sede en Suiza.

Resumiendo se pueden establecer los siguientes hechos: Jürg Weis murió el 22 de Agosto de 1988 en las cercanías de Ilobasco, no como consecuencia de un enfrentamiento con unidades de la Policía Nacional, como oficialmente se aseveró y se sigue aseverando en El Salvador.

Jürg Weis fue detenido y seguidamente asesinado. Todavía con vida recibió una herida con arma cortante cerca del corazón y fuertes golpes con un objeto contundente en la parte superior del pecho. Estas dos aseveraciones fueron comprobadas por el Informe Médico del Instituto Forense de la Universidad de Basel. Respecto al destrozamiento del cráneo no es posible asegurar si se produjo después de la muerte, o cuando Weis estaba todavía con vida, produciendo así el deceso. Además ha sido probado que la mutilación no fue causada por arma de fuego, sino por mano humana.

Los asesinos de Weis pertenecen al Ejército o a otra fuerza de seguridad salvadoreña. Los nombres concretos de los autores no pueden ser mencionados por nosotros. Las personas mencionadas por el Ejército y la Policía Nacional como participantes en el supuesto enfrentamiento, pueden haber sido, pero no deben ser, los asesinos. Es también posible que los asesinos de Weis pertenezcan al círculo de personas, que supuestamente se enteraron de los sucesos después de la muerte de Weis.

Tampoco se puede descartar que los asesinos pertenezcan a otra Unidades del ejército o de la Policía, o incluso a Unidades Especiales, que no fueron presentadas a la Delegación en relación con la muerte de

Weis. Tampoco se puede determinar a la persona, que destrozó el rostro de Jürg Weis con algún objeto cortante.

La Delegación descarta la posibilidad de que la Guerrilla sea la responsable del destrozamiento del cadáver de Jürg Weis. La forma del destrozamiento se realizó por manos experimentadas, lo que nos conduce a suponer que hubo participación de las Unidades Especiales del Ejército y Fuerzas de Seguridad conocidas como Escuadrones de la Muerte.

La Delegación no cuenta con pruebas de que Jürg Weis estuvo armado al momento de su apresamiento. Si bien es cierto tampoco se puede probar lo contrario, pero se debe partir del hecho de que no portaba armas.

La Delegación no puede asegurar si el asesinato de Jürg Weis se produjo en vista de que fue posible una vigilancia de Jürg Weis en la capital, y más probable a partir de la prolongación de la visa, el 19 de Agosto de 1988. La Delegación debe, sin embargo, considerar la posibilidad de que la decisión de asesinar a Jürg Weis fue tomada directamente por los miembros de la patrulla o de la unidad del Ejército que lo capturó, y que la intervención de instancias superiores tuvieron la finalidad de encubrir el asesinato. No obstante se puede asegurar para ambas variantes que:

—se propagó, por parte de los niveles más altos del Ejército, Policía y Gobierno, una versión falsa y premeditada sobre la muerte de Jürg Weis,

—el Estado Mayor ordeno respaldar la versión oficial, con la presentación a la Delegación de una falsa reconstrucción de los

hechos,

—así se obstaculizaba el esclarecimiento de los hechos y se encubría a los asesinos de Jürg Weis.

Para la Delegación no cabe duda de que el asesinato de Jürg Weis debe ser visto dentro del contexto del conflicto político actual, y en el marco de la interpretación oficial del conflicto político y militar que vive el país.

Dentro de este esquema se quiere hacer recaer la responsabilidad del conflicto social, cuya consecuencia es la guerra actual, solamente sobre la guerrilla. De esta manera, todas las personas que no están del lado del Gobierno, Ejército y Fuerzas de Seguridad, son calificadas dentro del esquema amigo-enemigo, como "amigos del FMLN", y por consiguiente como "subversivos" o "terroristas".

De acuerdo a una teoría sobre sedición, la "subversión" es dirigida por el "Comunismo Internacional".

Especialmente en el último tiempo se ha creado en El Salvador un clima en el cual los extranjeros dedicados a labores humanitarias, o que trabajan en instituciones religiosas, o que se preocupan por los derechos humanos, son acusados de tener relaciones directas con el FMLN, o de pertenecer al círculo de sus simpatizantes.

El periódico La Prensa Gráfica informó el 16 de Agosto de 1988, es decir pocos días antes de la muerte de Jürg Weis, que el Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Blandon, comunicaba sobre la presencia en el país de agitadores profesionales extranjeros bajo la cubierta de pertenecer a instituciones humanitarias o de trabajar en proyectos (como ayuda para los refugiados), y cuyo objetivo era el de provocar sedición. La muerte de Jürg Weis pocos días después, y su consiguiente clasificación premeditada en este sentido, tu-

vo de esta manera el carácter de una supuesta prueba en favor de la veracidad de la propaganda oficial.

La Delegación no puede probar, que el asesinato de Jürg Weis se produjo con ese objetivo por orden superior, aún cuando existen indicios para tal explicación de los sucesos. Solo así hubieran cumplido, el destrozamiento del cráneo y rostro, una función, cual es la de escarmiento— en especial de los movimientos de solidaridad internacionales con El Salvador, cuyo miembro activo fue Jürg Weis.

Pero aún en el caso de que no hubiera habido orden superior para asesinar a Jürg Weis, juega un papel importante la propaganda contra los extranjeros en la explicación del desarrollo de los sucesos. Es inevitable e incluso premeditado, que la difamación contra los extranjeros provocada desde arriba, tenga una influencia en el comportamiento del Ejército y de todas las fuerzas de seguridad, con lo cual se provocan reacciones beligerantes de las unidades de tropa y de las patrullas de la policía, que no se producirían sin esta propaganda ideológica. Jürg Weis era fácilmente identificable como extranjero, debido a su gran estatura de 1.90 m y su apariencia europea. En el momento de la detención, la patrulla se debió percatar de que se trataba de un caso especial. En este caso, el asesinato sería resultado de una difamación intencionada contra extranjeros, y de éste, los únicos responsables son el Gobierno, el Ejército y la policía.

La Delegación da especial importancia al hecho de que en el encubrimiento de los asesinos de Jürg Weis participó el Estado Mayor. Si el asesinato de Jürg Weis se cometió en realidad por orden superior, entonces la Delegación considera como probable que la orden fue recibida y ejecutada por el Servicio Secreto.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢ 45.00
correo	¢ 55.00
Centroamérica	\$ 20.00
Norte y Sur América	\$ 30.00
Europa	\$ 35.00
Otras regiones	\$ 35.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191.

